



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
 Radicación: 05001-31-05-013-2019-00256-01
 Demandante: Darío Alonso Cano Rincón
 Demandado: Colpensiones y Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
 Asunto: Apelación sentencia
 Procedencia: Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
 Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
 Temas: Pensión de invalidez- dictamen particular

Medellín, noviembre veinticinco (25) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el 1º de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor DARIO ALONSO CANO RINCÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES COLPENSIONES y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA. Radicado 05001-31-05-013-2019-00256-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor DARIO ALONSO CANO RINCÓN, llamó a juicio a COLPENSIONES y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, a fin de que se declare la nulidad del dictamen No. 2018260526XX del 12 de febrero de 2018 emitido por Colpensiones y del dictamen N° 074868-2018 del 11 de octubre de 2018 que fuera emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia; asimismo, se declare que presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, de origen común, estructurada desde 9 de enero de 2019; se condene a Colpensiones a reconocerle la pensión de invalidez de forma retroactiva, los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas y la indexación.

Como sustento de dichas súplicas se expuso que el señor Darío Alonso Cano Rincón fue calificado por Colpensiones, mediante dictamen N° 2018260526XX del 12 de febrero de 2018, momento en el cual se le asignó una pérdida de capacidad laboral del 36.5%, con fecha estructuración del 24 de enero de 2018, de origen común, que inconforme con el dictamen, se practicó nuevo dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, dictamen N° 074868-2018 del 11 de octubre de 2018, en el cual le fue asignada una pérdida de capacidad laboral del 43.40%, estructurada el 24 de enero de 2018.

Se narró que el actor se practicó un tercer dictamen ante la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, el 7 de febrero del 2019, y en dicho dictamen, se estableció una pérdida de capacidad laboral de origen común del 57.91%,

estructurada el 9 de enero de 2019, considerando que el dictamen realizado por Colpensiones y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, no son coherentes con el complejo patológico del accionante, desconociendo las deficiencias de compromiso sistémico del tejido conectivo el cual se encuentra en manejo clínico por reumatología. Finalmente, adujo que el accionante cuenta con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, razón por la cual elevó reclamación ante Colpensiones el 13 de marzo de 2019, sin existir pronunciamiento de la entidad a la fecha.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como cierto lo relativo a los dictámenes que le fueron realizados a la actora por Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, no constándole lo relacionado con el dictamen realizado por la IPS Universitaria, entidad que no está autorizada para realizar el mismo, no siendo cierto que los dictámenes realizados por la Junta Regional y por Colpensiones no sean coherentes, en tanto que en la calificación realizada por la IPS Universitaria, se tuvieron en cuenta enfermedades no expuestas y que no se padecían al momento de la calificación en primera oportunidad y en igual sentido, que no es cierto que el actor acredite los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.

En oposición al éxito de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez al actor; petición de lo no debido; improcedencia de intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas; prescripción; compensación indexada; imposibilidad de condena en costas; excepción innominada y descuento del retroactivo por salud.

Por su parte la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVAIDEZ DE ANTIOQUIA**, al dar respuesta a la demanda, aceptó como cierto las calificaciones de pérdida de capacidad laboral que le fueron realizadas al actor por Colpensiones y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, indicó no constarle las demás afirmaciones de la demanda y que no es cierto que el dictamen que profirió la entidad no sea coherente con los diagnósticos del demandante, situación que corresponde a una afirmación subjetiva, resaltando que la calificación de la Junta se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez.

En su defensa formuló las excepciones de legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen; prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 1º de septiembre de 2022, por medio del cual absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra por el señor Darío Alonso Cano Rincón, a quien impuso condena en costas.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del pretensor interpuso el recurso de apelación, exponiendo que en el proceso se practicaron diferentes dictámenes, encontrando que dentro de la labor que efectuaron las demandadas, se omitió la calificación de la enfermedad del tejido conectivo y es así que lo reseñó la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, cuando dice que no se tuvo en cuenta el compromiso del tejido conectivo no especificado y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, parte de entender dicha circunstancia

al efectivamente calificar, pero en una clase diferente, esto es, en la clase 2, cuando la IPS Universitaria asignó la clase 3, de manera que una vez efectuado el análisis sobre el real complejo patológico para dar lugar a aplicar la tabla 14.15, se encuentra más sustentación en el dictamen de la IPS Universitaria, se observó y lo explicó el doctor José William Arenas que existen síntomas o signos que en efectos no son propios de la vasculitis y eso explica que en efecto dichos síntomas son propios de enfermedades como la artritis y no de las artrosis como lo entiende el doctor Juan Diego y en múltiples procesos se tiene que en efecto las desviaciones articulares no se presentan dentro de las patologías denominadas vasculitis, menos las deformaciones y sinovitis.

Sostuvo que el dictamen de la facultad omite percibir la realidad patológica del actor, en tanto padece de vasculitis, la cual esta reseñada en el capítulo 14.6 del Decreto 1507 de 2014 y aterrizándola a la tabla 14.15 se encuentra que existen 7 síntomas o signos descritos en la clase 3 y en la clase 2 existen 3 de ellos, pero explica el doctor José William que existen criterios, síntomas o signos descritos en la clase 3 no propias de la vasculitis y es desde ese punto de vista que asigna la clase 3, porque tiene una rigidez matinal, poliartralgias, y poli artritis y si se mira el historial clínico se encuentra a folio 61 que aparece la vasculitis el 9 de junio de 2018 y existe el compromiso de la deficiencia por enfermedad del tejido conectivo que involucra el sistema vascular y es bajo esa perspectiva que se encuentra que en realidad el Decreto 1507 no es sabio al asignar cada una de las tablas y asignar cada uno de los síntomas y signos, porque existen patologías que se pueden calificar con la tabla 14.15 pero no reúnen todos los criterios descritos allí o no los pueden reunir a futuro dado la confirmación de las patologías, considerando más completa la contestación del doctor José William y más responsivo.

Indicó que otro punto importante es el aspecto del rol laboral, afirmando que la Junta Regional asignó un 15% a este porcentaje que es para las personas que requieren una reubicación definitiva y el antecedente a la asignación del 15% es

para las personas que requieren un reintegro con modificaciones en el puesto de trabajo, entonces desde el punto de vista del rol laboral si la Junta asigna 15%, por dos diagnósticos, faltando las deficiencias por enfermedades del tejido conectivo, no se considera prudente asignar un 10% como lo entiende la Facultad Pública de la universidad de Antioquia que es para un puesto de trabajo adaptado.

Por lo anterior, solicita se tenga en cuenta el dictamen emitido por la IPS y se ordene el reconocimiento de la pensión de invalidez, los intereses moratorios o en su defecto la indexación.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Colpensiones quien solicita se confirme la sentencia de primera instancia, señalando que quedó demostrado que el dictamen de la IPS de la Universidad de Antioquia, no cumple con los criterios técnicos-científicos del manual único de calificación, toda vez que conforme la historia clínica del demandante. éste no padece de poliartritis sistémico migratorio, considerando que el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, si cumple con los criterios del Decreto 1507 de 2014.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el

artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Darío Alonso Cano Rincón nació el 27 de abril de 1966, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 54 del anexo 01 del expediente digital, contando con 56 años en la actualidad.

- Que el señor Darío Alonso Cano Rincón, fue calificado por Colpensiones mediante dictamen N° 2018260526XX del 12 de febrero de 2018, con un 36.5% de pérdida de capacidad laboral, de origen común y fecha de estructuración 24 de enero de 2018, posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, expidió el dictamen N° 074868-2018 del 11 de octubre de 2018, en el cual se le asignó una pérdida de capacidad laboral del 43.40%, con fecha de estructuración del 24 de enero de 2018, tal y como enseñan en los documentos visibles a folios 34 a 39 y 42 a 45 del anexo 01 del expediente digital.

-Que el accionante fue calificado por la IPS UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (fls 22-26 anexo 01 del expediente digital, con una pérdida de capacidad laboral del 57.91 % estructurada el 07 de febrero de 2019.

2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida el 1° de septiembre del año en curso por la señora Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, por medio de la cual fueron desatendidas las pretensiones incoadas por el señor Darío Alonso Cano Rincón, determinando para tal fin, si el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y, en caso afirmativo, si reúne los requisitos para ser beneficiario de la pensión de invalidez, con el consecuencial reconocimiento de intereses moratorios y la indexación de las condenas?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, el señor Darío Alonso Cano Rincón, no presenta una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, pues no es posible dar fuerza probatoria al dictamen proferido por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, el 7 de febrero de 2019, en tanto que no se logró acreditar que dicho dictamen estuviera acorde con la historia clínica del accionante y su real estado de salud, en consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 prescribe:

“Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”

Por su parte, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 1° de la Ley 860 de 2003, indica:

“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-428 de 2009”.

Del estado de invalidez

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece el procedimiento en sede administrativa para la calificación de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y la fecha de estructuración, señalando los organismos competentes para realizar esta calificación, que lo son, en primera instancia, las EPS, las ARL, las aseguradoras que tienen a su cargo seguros previsionales de invalidez y en caso de inconformidad la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y, en segunda instancia, con ocasión del recurso de apelación frente al dictamen de la Junta Regional de Invalidez, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, siendo esta última el organismo de cierre.

Los dictámenes en firme que profieren las Juntas de Calificación de Invalidez, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, pueden ser controvertidos por vía judicial, así lo reiteró el artículo 44 del Decreto 1352 del año 2013, que dispone lo siguiente:

*“Controversias sobre **los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez**. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código*

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del régimen de seguridad social integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”. (Subraya y Negrilla de la Sala)

Se deduce de la norma citada, que los dictámenes de las Juntas que se emiten en sede administrativa, no tienen carácter definitivo, en la medida en que el interesado, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, a efectos de controvertirlos y para ello podrá apoyarse en otras calificaciones técnicas.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente a este punto y en relación con el valor probatorio que debe darse a los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación competentes en el trámite administrativo, ha fijado reglas uniformes, según las cuales, los dictámenes son un elemento probatorio más, que puede ser valorado por el Juez y por lo tanto, es dable que en sede judicial, el fallador se aparte de las conclusiones contenidas en dictámenes por las Juntas de Calificación de Invalidez, ese criterio está contenido, entre otros pronunciamientos, en las sentencias SL, radicación 29622 del 19 de octubre del 2006, SL, Radicación 32617 del 23 de septiembre de 2008, SL, Radicación, 35450 del 18 de septiembre de 2012, SL 52072 del 9 de abril de 2014 y la sentencia SL 16374 del 4 de noviembre del año 2014, entre otras.

Asimismo, en sentencia SL513 del 17 de febrero de 2021, se itera:

*“La Corte, en providencia CSJ SL 2984-2020, en la cual memoró las sentencias CSJ SL3992-2019 y SL4571-2019 enseñó:
Para dar respuesta a los planteamientos de la recurrente, baste traer a colación lo explicado en sentencia SL3992-2019, así:*

Esta sala de la Corte ha resaltado la importancia intrínseca que tienen esos dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, por emanar de autoridades científico técnicas autorizadas por el legislador y por su deber de fundamentarse en la historia

clínica, exámenes médicos y demás observaciones diagnósticas relativas al estado de salud del paciente. Por ello, ha dicho que, en principio, el juez del trabajo está obligado a observarlos y respetarlos, en el marco de sus facultades de valoración probatoria.

Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

Ahora bien, es cierto que esta facultad judicial, no llega hasta reconocer competencias técnicas al Juez, quien para su decisión, necesariamente, tendrá que apoyarse en un dictamen pericial, esto es, aquél que, de acuerdo con la valoración probatoria, le ofrece mayor certeza, así quedó precisado, de tiempo atrás, en la sentencia SL 2349 de 2021, radicación 83859, en la cual la Alta Corporación rememorando la sentencia SL, Radicación 29622 del 19 de octubre del 2006, sostuvo: *“Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.”*

De ahí que la decisión del problema jurídico necesariamente conduce a que el fallador acoja el dictamen que mayor convencimiento le genera, atendiendo al

principio de libre formación del convencimiento, establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

2.6.- CASO CONCRETO

En el presente caso, se observa que la parte demandante pretermitió el trámite administrativo de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, apoyándose en un dictamen particular y con fundamento en el mismo, acudió a la vía judicial para controvertir el dictamen que en primera oportunidad realizó Colpensiones y el que, con posterioridad, realizó la Junta Regional de Calificación de Invalidez, siendo ordenado por la a quo como prueba en trámite del proceso un nuevo dictamen, el cual se realizó la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Así las cosas, obran en el plenario cuatro (4) dictámenes de calificación de pérdida laboral realizados al señor Darío Alonso Cano Rincón, mismos que reportan lo siguiente:

	COLPENSIONES (34 a 39 anexo 01 del expediente digital)	JUNTA REGIONAL CALIFICACION INVALIDEZ ANTIOQUIA (fls. 42-45 anexo 01 del expediente digital)	IPS UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (fls 22-26 anexo 01 del expediente digital)	FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (fls 3-9 anexo 21 del expediente digital)
MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ	DECRETO 1507 DE 2014	DECRETO 1507 DE 2014	DECRETO 1507 DE 2014	DECRETO 1507 DE 2014

FECHA DICTAMEN	12 febrero de 2018	11 octubre de 2018	07 febrero de 2019	20 noviembre de 2021
PÉRDIDA CAPACIDAD LABORAL	36.5%	43.40%	57.91%	40.15%
ESTRUCTUR ACIÓN	24 enero de 2018	24 enero de 2018	09 enero de 2019	30 enero de 2019
ORIGEN	Común	Común	Común	Común
DEFICIENCI A	20.39%	20.40%	34.91%	23.95%
ROL LABORAL, OCUPACION AL	16.1%	18%	23%	16.2%
PATOLOGIAS	-Deficiencias de la columna lumbar -Trastornos de ansiedad y somatomorfos	-Espondilólisis -Lumbago no especificado -trastorno depresivo recurrente, no especificado	-Compromiso sistémico del tejido conjuntivo, no especificado -Espondilólisis -Lumbago no especificado -trastorno depresivo recurrente, no especificado	-Poliartralgia -Lumbago -Depresión ·

Procura la parte actora en este juicio que se acoja el dictamen efectuado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia el día 07 de febrero de 2019, el cual, como se describió anteriormente otorga al señor Darío Alonso Cano Rincón un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 57.91%, siendo esta la única experticia en la cual se obtuvo un porcentaje superior al 50%, apetencia que no está llamada a prosperar, pues a juicio de esta Sala resultan acertadas las conclusiones a las cuales arribó la falladora de primera instancia, para desestimar el mismo, evidenciándose un estudio serio y juicioso de los diferentes dictámenes que conforman el acervo probatorio por parte de la funcionaria.

De manera inicial, precisa la Sala que no resulta acertado el reparo presentado por el apoderado recurrente cuando afirma que tanto Colpensiones como la Junta Regional de Calificación de Invalidez, omitieron la calificación de la enfermedad del tejido conectivo, pues, aunque resulta cierto que dicho diagnóstico no fue incluido en los dictámenes, ello obedeció a que para las fechas en que se efectuaron las calificaciones, esto es, 12 de febrero de 2018 y 11 de octubre de 2018, el referido diagnóstico no se encontraba documentado en la historia clínica y en tal sentido, mal podría atribuirse omisión alguna a las entidades accionadas.

Se colige de lo anterior, que son los dictámenes proferidos por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, las experticias que, en mayor medida, dan cuenta de la condición médica y pérdida de capacidad laboral del actor, en tanto que los mismos tuvieron presentes la totalidad de diagnósticos y hallazgos de la historia clínica del pretensor, debiéndose resaltar que ambas calificaciones fueron ratificadas por los médicos que las realizaron en la audiencia de trámite.

Ahora, se tiene que los dictámenes referenciados, presentan porcentajes diferentes tanto en la calificación de las deficiencias, como del rol laboral y otras áreas ocupacionales, advirtiendo, en primer lugar, que respecto de las deficiencias la IPS Universitaria asignó un porcentaje del 34.91%, mientras que la Facultad Nacional de Salud pública otorgó un 23.95%, resultando evidente que el principal motivo de diferencia radica en la clase en la cual se ubica la deficiencia por enfermedades del tejido conectivo conforme al Decreto 1507 de 2014, observando que la IPS Universitaria se sitúa en el capítulo 14, tabla 14.15, clase 3 y asigna un valor de 49.00%, mientras la Facultad Nacional de Salud Pública, utilizando igualmente la tabla 14.15, lo clasifica en clase 2 y asigna un 12%.

Estudiado el Decreto 1507 de 2014, se tiene que el capítulo 14 trata las deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores y la tabla 14.15 corresponde a las deficiencias por enfermedades del tejido conectivo que involucran el sistema osteomuscular, no existiendo discusión en que es esta la tabla que debe tenerse presente atendiendo a los padecimientos del señor Cano Rincón.

En cuanto a las deficiencias por enfermedades del tejido conectivo, el numeral 14.15 del Manual Único de Calificación establece cuatro clases para la clasificación y a fin de determinar el grado de severidad, es así como enlista según cada clase unos factores principales, señalando que los signos y síntomas para elegir la clase, se deben reunir en más del 50%, los cuales para la clase 3 que fue la determinada por la IPS Universitaria, requiere los siguientes factores: 1. Rigidez matinal mayor o igual a 1 hora, 2. Artralgias migratorias, 3. Poliartritis simétrica o migratoria, 4. Sinovitis, 5. Deformaciones, 6. Desviaciones articulares y 7. Manifestaciones extra articulares

Frente a la aplicación de la clase 3, el galeno JOSE WILLIAM VARGAS ARENAS, quien fungió como ponente en el dictamen practicado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, al ratificar el dictamen en la audiencia reconoció que el actor no presenta todos los diagnósticos moderadores para aplicar la clase 3, sosteniendo que se cumple con la rigidez matinal, la poliartralgia y las manifestaciones extra articulares, sosteniendo además que la tabla 14.15 no puede aplicarse de manera general a todas las enfermedades de tejido conectivo, porque todas tienen unas características particulares, por lo que no se puede exigir el 50%, concluyendo que la tabla necesita una actualización.

En relación al mismo punto, el médico JUAN DIEGO ZAPATA SERNA, quien elaboró el dictamen ordenado en sede judicial por parte de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, sostuvo que el actor cumple con los criterios de la clase 2, al tener rigidez matinal y la poliartralgia, siendo

enfático en que el señor Darío Alonso Cano Rincón no acredita más del 50% de los signos o síntomas para que se le aplique la clase 3, que no hay evidencia de deformaciones, no hay desviaciones articulares y que no se cuenta con pruebas imagenológicas, gammagrafías o resonancias de otras articulaciones distintas a las de la columna que puedan determinar otras características para acreditar el cumplimiento de otros factores moderadores.

Bajo el anterior escenario, es claro para esta magistratura que, en efecto, el gestor del proceso no cumple con los criterios exigidos en la tabla 14.15 del Decreto 1507 de 2017 para determinar una clase 3 en las deficiencias del tejido conectivo, al no presentar el 50% de los síntomas requeridos para esa clase, razón por la cual no puede acogerse la calificación aportada por la demandante emitida por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia.

Finalmente, debe señalarse que no resulta de recibo lo manifestado por el alzadoista a fin de lograr la revocatoria de la sentencia de primera instancia, cuando sostiene que el Decreto 1507 no es sabio al asignar cada una de las tablas y asignar cada uno de los síntomas y signos, porque existen patologías que se pueden calificar con la tabla 14.15 pero no reúnen todos los criterios descritos allí, pues es claro que no tendría esta Sala de Decisión competencia técnica ni jurídica para calificar la pertinencia científica y acierto del cuestionado decreto, menos aún podría inaplicarlo.

En razón de lo anterior, debe acogerse el dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, tal y como lo hizo la a quo, porque el mismo se encuentra ajustado a lo dispuesto en el manual único de calificación de Invalidez vigente.

Colofón de lo anterior, se impone confirmar la sentencia proferida en primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho en esta instancia medio salario mínimo legal mensual correspondiente a la suma de \$500.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral de Circuito de Medellín, el 01 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor DARIO ALONSO CANO RINCÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

2.- COSTAS a cargo del demandante, inclúyase como agencias en derecho en esta instancia medio salario mínimo legal mensual correspondiente a la suma de \$500.000

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma estancada por salubridad pública
(Art. 11 Deceto 492 de 2020)



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado